

La Corriente se Revierte

Milton Friedman*
Rose Friedman**

**Premio Nobel de Economía (1976). Doctor en Economía de la Universidad de Columbia (1946). Profesor distinguido de la Universidad de Chicago. Ex presidente de la Asociación de Economistas Norteamericanos. Es autor de 19 libros e innumerables artículos.*

***Investigadora de la Institución Hoover, y anteriormente del National Bureau of Economic Research, Estados Unidos.*

La corriente se revierte

**Milton Friedman y
Rose Friedman**

La falla de los gobiernos occidentales en alcanzar los objetivos prometidos, ha producido una reacción generalizada contra los gobiernos grandes. En Gran Bretaña, esta reversión llevó al poder, en 1979, a Margaret Thatcher, con un programa que prometía que su gobierno conservador invertiría las políticas socialistas seguidas tanto por gobiernos conservadores anteriores como por los laboristas, después del término de la II Guerra Mundial. En Suecia, en 1976, condujo a la derrota del Partido Social Demócrata después de más de cuatro décadas de gobierno ininterrumpido. En Francia, llevó a un cambio dramático en el diseño de la política para eliminar los controles de precios y salarios del gobierno y reducir fuertemente otras formas de intervención gubernamental. En los Estados Unidos, esta respuesta ha encontrado su manifestación más fuerte en la rebelión contra los impuestos que ha cundido por toda la nación, simbolizada por la aprobación de la Proposición 13 en California, y llevada a efecto en otros estados a través de enmiendas constitucionales que limitan los impuestos estatales.

La reversión puede resultar de corta vida, y después de un breve intervalo, ser seguida por un resurgimiento de la tendencia hacia gobiernos aún más grandes. El entusiasmo generalizado por reducir impuestos gubernamentales no ha sido acompañado por un entusiasmo similar para eliminar programas gubernamentales, excepto programas que benefician a personas. La reacción contra los gobiernos grandes ha sido estimulada por la inflación desenfrenada, que si es rentable desde un punto de vista político controlarla, los gobiernos pueden hacerlo. Si lo hacen, la reversión puede enmudecer o desaparecer.

Nosotros creemos que la reversión es más que una respuesta a

la inflación transitoria. Por el contrario, la inflación es, en cierto modo, una respuesta a la reacción. Como se ha hecho políticamente menos atractivo votar por impuestos más altos para financiar gastos mayores, los legisladores han recurrido a financiar el gasto a través de la inflación, que es un impuesto oculto que se puede establecer sin haber sido votado, una tributación sin representación. Esto no es más popular en el siglo veinte de lo que fue en el dieciocho.

Además, el contraste entre los objetivos deseados de los programas de gobierno y sus resultados efectivos es tan penetrante, tan difundido, que muchos de los más fuertes defensores de los gobiernos grandes han tenido que reconocer la falla del gobierno, aunque la solución que proponen casi siempre está dirigida hacia gobiernos aún más grandes.

Una corriente de opinión que fluya con fuerza, tiende a barrer todos los obstáculos, todos los puntos de vista contrarios. De la misma forma, cuando alcanza su máximo y surge una corriente contraria, ésta también fluye fuertemente.

La corriente de opinión en favor de la libertad económica y gobiernos limitados que promovieron Adam Smith y Thomas Jefferson, fluyó con fuerza hasta fines del siglo diecinueve. En ese momento cambió, en parte debido al éxito de la libertad económica y del gobierno restringido en producir un crecimiento económico y mejorar el bienestar de la mayoría de la población; esto puso de manifiesto los males que quedaban (y por supuesto había muchos), todos muy destacados, concitando un deseo general para hacer algo con respecto a ellos. La corriente hacia el socialismo "Fabiano" y el liberalismo del "New Deal" fluyó a su vez fuertemente, fomentando un cambio en la dirección de la política británica a comienzos del siglo veinte, y en la política de Estados Unidos después de la Gran Depresión.

Este rumbo ha durado tres cuartos de siglo en Gran Bretaña, medio siglo en Estados Unidos. También está alcanzando su máximo. Sus bases intelectuales han sido debilitadas a medida que la experiencia ha refutado repetidamente las expectativas. Sus defensores están a la defensiva. No tienen soluciones a los males de hoy. Ya no pueden despertar entusiasmo entre la juventud, que encuentra ahora mucho más excitantes las ideas de Adam Smith o Karl Marx que el socialismo "Fabiano" o el liberalismo del "New Deal".

Aunque la corriente hacia el socialismo "Fabiano" y el liberalismo del "New Deal" ha llegado al máximo, todavía no existe evidencia clara de si la que triunfó favorece una mayor libertad y

gobiernos limitados, en el espíritu de Smith y Jefferson, o un gobierno monolítico omnipotente en el espíritu de Marx y Mao. El ambiente de opinión intelectual, o las políticas actuales, aún no resuelven este vital asunto. A juzgar por el pasado, esta decisión la tomará primeramente la opinión pública y será seguida más adelante por las políticas.

Importancia del Clima Intelectual de Opinión

India y Japón ilustran la importancia del clima intelectual de opinión, el que determina los prejuicios irreflexivos de la mayoría de las personas y sus líderes; sus reflejos condicionados hacia un curso de acción u otro.

Los líderes Meiji que se hicieron cargo de Japón en 1867, se dedicaron especialmente a fortalecer el poder y la gloria de su país. No daban especial valor a la libertad individual o a la libertad política. Creían en la aristocracia y en el control político por una élite; aun así, adoptaron una política económica liberal que concedió mayores oportunidades a las masas y, durante las primeras décadas, mayor libertad personal. Los hombres que se hicieron cargo en India, por el contrario, eran ardientes defensores de la libertad política, la libertad personal y la democracia. Su objetivo no era solamente el poder de la nación, sino también el mejoramiento en las condiciones económicas de las masas. Sin embargo, adoptaron una política económica colectivista que debilitó a su pueblo con restricciones y terminó por socavar el alto grado de libertad individual y política fomentado por los británicos.

La diferencia en las políticas refleja fielmente los diferentes climas intelectuales de ambas épocas. A mediados del siglo diecinueve, se daba por supuesto que una economía moderna se debía organizar a través del libre comercio y la empresa privada. Probablemente nunca se les ocurrió a los líderes japoneses seguir otra acción. A mediados del siglo veinte se daba por supuesto que una economía moderna debía organizarse a través de un control centralizado y planes quinquenales. Probablemente nunca se les ocurrió a los líderes hindúes seguir otra acción. Resulta interesante observar que ambos enfoques provinieron de Gran Bretaña. Los japoneses adoptaron las políticas de Adam Smith. Los hindúes adoptaron las políticas de Harold Laski.

La historia de Estados Unidos constituye también una fuerte evidencia de la importancia del clima de opinión. El notable grupo de hombres que se congregó en el Salón de Independencia de Filadelfia en 1787 para escribir una nueva constitución para la

nación que ellos habían ayudado a crear, estaba inmerso en el momento histórico y enormemente influenciado por la corriente de opinión de Gran Bretaña; la misma corriente que afectaría después a la política japonesa. Veían la concentración del poder, especialmente en manos del gobierno, como el gran peligro para la libertad. Con esto en mente, redactaron la Constitución. Este era un documento que buscaba limitar el poder del gobierno, mantener el poder descentralizado, reservar a los individuos el control sobre sus propias vidas. Esta intención es aún más evidente en la Declaración de Derechos, y en las primeras diez enmiendas de la Constitución, que en el texto básico: "El Congreso no podrá ordenar ley alguna respecto a la fundación de una religión, prohibir el libre ejercicio de ésta, o disminuir la libertad de expresión o de prensa"; "el derecho de las personas de guardar y cargar armas no debe ser violado"; "la enumeración de ciertos derechos en la Constitución no debe ser interpretada para negar o despreciar otros derechos que conservan las personas"; "los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos a los Estados, son reservados a los Estados, respectivamente, o a las personas" (de las Enmiendas I, II, IX y X).

A fines del siglo diecinueve y/o a principios del veinte, el clima intelectual de opinión en Estados Unidos, en gran parte bajo la misma influencia británica que más tarde afectó la política hindú, comenzó a cambiar. Fue reduciendo su confianza en la responsabilidad individual y en el mercado, para basarla en la responsabilidad social y en el gobierno. Alrededor de 1920 una fuerte minoría, si no una verdadera mayoría, de profesores de colegios y universidades se comprometieron activamente en acciones públicas apoyando opiniones socialistas. *La Nueva República* y *la Nación* eran los diarios líderes de opinión intelectual. El partido socialista de los Estados Unidos, dirigido por Norman Thomas, tenía amplias raíces, pero su mayor fuerza estaba en los colegios y universidades.

En nuestra opinión el partido socialista era el partido político con más influencia en las primeras décadas del siglo veinte. Como no tenía esperanzas de un éxito electoral a nivel nacional (eligió a unos pocos funcionarios locales, principalmente en Milwaukee, Wisconsin) se podía permitir ser un partido de principio. Los demócratas y republicanos no podían. Ellos, para mantener unidos intereses y facciones ampliamente dispares, tenían que ser partidos de conveniencia y compromiso. Debían evitar el "extremismo", mantenerse en la base central. No eran idénticos como dos gotas de agua, pero cercanos a esto. Sin embargo, a

través del tiempo ambos partidos mayoritarios adoptaron la posición del partido socialista. El partido socialista nunca recibió más del 6% de los votos populares para Presidente (en 1912 por Eugene Debs). Obtuvo menos del 1 por ciento en 1928 y solamente el 2 por ciento en 1932 (por Norman Thomas). Pero ya en nuestros días, casi todos los principios económicos de su programa presidencial de 1928 han sido promulgados en leyes.

Una vez que el cambio en el clima de opinión se extendió a la mayoría del público, como ocurrió después de la Gran Depresión, la Constitución, aprobada en un clima de opinión muy diferente, pudo ser a lo más un dique que atrasó el crecimiento del poder del gobierno, pero no un obstáculo definitivo a él.

En las palabras de Mr. Dooley*: "No importa la letra de la Constitución, la Corte Suprema sigue la corriente de opinión triunfante". Las palabras de la Constitución fueron reinterpretadas y se les dio nuevo significado. Lo que había pretendido ser una barrera a la extensión del poder del gobierno demostró ser inefectiva. Como escribió Raoul Berger al analizar la interpretación de una enmienda, realizada por la Corte Suprema,

"La Enmienda Decimocuarta es un caso de estudio típico, de aquello que el juez Harían describe como "el ejercicio del poder de hacer enmiendas" de la Corte Suprema, su continua revisión de la Constitución bajo el pretexto de interpretación... "La Corte Suprema se ha burlado del deseo de los forjadores de la Constitución y sustituyó una interpretación en categórica contradicción con el diseño original..."

"Tal conducta lleva a la conclusión que los jueces se han convertido en una ley por sí mismos."¹

Opinión y Comportamiento Popular

Encontramos evidencia que ha llegado a su máximo la corriente hacia el socialismo "Fabiano" y el liberalismo del "New Deal", no sólo en los escritos de los intelectuales, no sólo en los sentimientos que los políticos expresan en las asambleas, sino que también en el modo de comportarse de las personas. Su comportamiento está sin duda influenciado por la opinión. A su vez

*Personaje satírico de la literatura irlandesa de comienzos de siglo. (N.delT.).

!Raoul Berger, *Government by Judiciary* (Cambridge: Harvard University Press, 1977), págs. 1,408.

refuerza tal opinión y juega un rol principal para traducirla en políticas.

Como A. V. Dicey escribió con notable precisión hace más de sesenta años: "Si se detiene el progreso de la legislación socialista, el rechazo se deberá no tanto a la influencia de algún pensador, como a un hecho sobresaliente que llamará la atención pública; como por ejemplo, el aumento en la carga de los impuestos que es la concomitante usual, sino invariable, de una política socialista".² La inflación, los altos impuestos y la ineficiencia manifiesta, la burocracia y excesiva regulación que emana de los gobiernos grandes está llevando a los efectos que predijo Dicey. Han llevado a las personas a manejar los asuntos en sus propias manos, a tratar de encontrar caminos que eviten los obstáculos gubernamentales.

En 1978, Pat Brennan se convirtió en celebridad cuando ella y su marido entraron en competencia con la oficina postal de Estados Unidos. Instalaron el negocio en un sótano de Rochester, Nueva York, garantizando la entrega de paquetes y cartas dentro de la ciudad el mismo día, a un costo menor del cobrado por la Oficina Postal. Pronto su negocio era floreciente.

No hay duda que estaban quebrantando la ley. La Oficina Postal los llevó a la Corte y después de una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema, perdieron su caso. Los empresarios locales les proporcionaron respaldo financiero.

Pat Brennan dijo:

"Pensé que iba a haber una rebelión tranquila y que quizás nosotros éramos el principio de ella... Podía verse a la gente hostigando a los burócratas, cuando hace años ello no podía soñarse, porque uno podía ser aplastado... Las personas comprendían que su destino era suyo propio y no de alguien arriba en Washington, quien no tenía interés en ellos, sea lo que fuere. Por lo tanto, no es una cuestión de anarquía, sino una cuestión de que las personas veían el poder de los burócratas y lo rechazaban...

"El problema de la libertad surge en cualquier tipo de negocio ya sea por el derecho a continuarlo o por el derecho a decidir qué es lo que va a hacer. También está la cuestión de la libertad de los consumidores para utilizar un servicio que ellos no encuentran caro, y de mejor calidad. De acuerdo al gobierno federal y al cuerpo de leyes llamado Estatutos Privados Expresos, no tengo la libertad de empezar un negocio y

² *Lectures on the Relation between Law and Public Opinion* (1914 ed) pág. 302.

el consumidor no tiene la libertad de utilizarlo, lo que parece muy extraño en un país como éste en que todo el contexto del país está basado en la libertad y la libre empresa."

Pat Brennan está expresando una respuesta humana natural al intento por otras personas de controlar su vida, cuando no es de incumbencia de ellos. La primera reacción es el resentimiento; la segunda, es el intento para salvar los obstáculos a través de medios legales; finalmente, se produce una pérdida general de respeto por la ley. Esta consecuencia final es deplorable, pero inevitable.

Un ejemplo notable es lo que ha ocurrido en Gran Bretaña en reacción a los impuestos confiscatorios. Una autoridad británica, Graham Turner, dice:

"Yo creo que es perfectamente justo decir que nos hemos convertido, en el transcurso de los últimos diez o quince años, en una nación de 'tramposos'.

"¿Cómo lo hacen? Lo hacen de una variedad infinita de maneras. Vamos directo al nivel más bajo. Tomemos un pequeño almacén en un área rural... ¿cómo hace dinero? Encuentra que comprando al por mayor, siempre debe usar facturas; pero si va a las tiendas de "pague al contado y lléveselo", y compra allí sus bienes... el beneficio marginal sobre ellos no estará sujeto a impuesto, porque el inspector de impuestos simplemente no sabrá que él tiene esos bienes. Este es el modo en que lo hace.

"Luego, si se toma el límite superior—si se toma un director de una compañía— bien, hay todo tipo de formas en que él puede hacerlo. Compra su comida a través de la compañía, tiene sus vacaciones a cargo de la compañía, pone a su esposa como director a pesar que nunca visita la fábrica. Mediante el simple artificio de construir casas al mismo tiempo que una fábrica, su casa logra ser terminada entre las primeras. Este fenómeno abarca todos los niveles de actividad, desde aquella persona de la clase trabajadora que hace trabajos de sirviente, hasta el nivel superior: empresarios, señores políticos, miembros del gabinete y miembros de la oposición. Todos ellos lo hacen.

"Pienso que casi todos sienten ahora que el sistema de impuestos es básicamente injusto, y todos los que pueden, tratan de encontrar el modo de evadirlo. Una vez que hay consenso en que el sistema de impuesto es injusto, el país se convierte de hecho en una especie de conspiración, y todos se ayudan a "hacer trampas".

"En este país no hay dificultad de evadir impuestos por-

que las demás personas realmente quieren ayudar. Quince años atrás esto habría sido muy diferente. Las personas habrían dicho: No, esto no debe ser".

O considere este artículo de Melvyn B. Krauss en el *Wall Street Journal* sobre "La revolución contra los impuestos suecos" (1.º de febrero de 1979, pág. 18):

"La revolución sueca contra los altos impuestos en occidente está basada en la iniciativa personal. En vez de confiar en los políticos, los suecos toman los asuntos en sus propias manos y simplemente se niegan a pagar. Esto puede hacerse de muchos modos, muchos de ellos legales...

"Una forma en que un sueco se niega a pagar un impuesto es trabajando menos... Suecos navegando en el bello archipiélago de Estocolmo ilustran vivamente la tranquila rebelión de impuestos del país.

"Los suecos escapan de los impuestos por sí mismos...

"El trueque es otro modo en que los suecos se resisten a los altos impuestos. Tentar a un dentista sueco para que deje la cancha de tenis y entre a su oficina no es una cosa fácil. Pero un abogado con dolor de muelas puede hacerlo. El abogado puede ofrecer servicios legales en pago por los servicios dentales. El trueque le ahorra al dentista dos impuestos: su propio impuesto a la renta más el impuesto sobre los honorarios del abogado. A pesar de suponerse que el trueque es signo de una economía primitiva, los altos impuestos suecos lo han hecho un medio popular de hacer negocios en el estado benefactor, particularmente en las profesiones...

"La revolución de los impuestos en Suecia no es una revolución del hombre rico. Tiene lugar en todos los niveles de ingreso...

"El estado benefactor sueco está en un dilema. Su ideología lleva a más y más gastos de gobierno... Pero sus ciudadanos han llegado a un punto de saturación después del cual se resisten a mayores incrementos de impuestos... el único modo en que los suecos pueden evitar los mayores impuestos es actuando de modo perjudicial para la economía. Aumentar el gasto público de este modo socava la base económica sobre la que depende la economía de bienestar".

Por qué Prevalecen los Intereses Particulares

Si el punto máximo en la corriente hacia el socialismo "Fabiano" y el liberalismo del "New Deal" va a ser seguido por un

movimiento hacia una sociedad más libre y un gobierno más limitado, en vez de hacia una sociedad totalitaria, el público debe no sólo reconocer los defectos de la presente situación sino también cómo se llegó a ella y qué podemos hacer al respecto. ¿Por qué los resultados de las políticas son tan a menudo opuestos a los objetivos esperados? ¿Por qué los intereses particulares prevalecen sobre el interés general? ¿Qué planes podemos usar para detener e invertir el proceso?

El poder en Washington

Cada vez que visitamos Washington D.C., nos impresionamos por el poder que está concentrado en esa ciudad. Caminando por los pasillos del Congreso, es difícil encontrar a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a los 100 senadores entre sus 18.000 empleados, alrededor de 65 por senador y 27 por cada miembro de la Cámara. Esto se complementa con más de 15.000 cabilderos registrados —a menudo acompañados por secretarías, mecanógrafos, investigadores o delegados del interés particular que ellos representan— que caminan por los mismos pasillos buscando ejercer influencia.

Y esto no es más que la punta del iceberg. El gobierno federal emplea cerca de 3 millones de civiles (excluyendo las fuerzas militares uniformadas). Alrededor de 350.000 están en Washington y en los alrededores del área metropolitana. Sin contar otros que están empleados indirectamente a través de contratos del gobierno con organizaciones nominalmente privadas, o están empleados por organizaciones empresariales o de trabajo u otros grupos de interés particulares que mantienen sus centros de operaciones —o al menos una oficina— en Washington, exclusivamente porque éste es el centro del gobierno.

Washington es un imán para los abogados. Muchas de las más grandes e influyentes firmas del país están localizadas allá. Se dice que en Washington hay más de 7.000 abogados comprometidos en prácticas federales o solamente comunes. Más de 160 firmas de abogados que no son de la ciudad tienen oficina en Washington.³

El poder en Washington no es un poder monolítico en unas pocas manos, como es en los países totalitarios como la Unión Soviética, China Roja o Cuba. Está fragmentado. Todos los grupos

³ "Boom Industry", *Wall Street Journal*, 12 de junio 1979, pág. 1, col. 5.

particulares del país tratan de meter sus manos en el fragmento que puedan. El resultado es que difícilmente existe un asunto que no comprometa al gobierno con todas las partes involucradas.

Por ejemplo, en un sólido edificio de Washington algunos empleados del gobierno están trabajando tiempo completo en idear e implementar estrategias para gastar nuestro dinero en desalentarnos de fumar cigarrillos. En otro edificio sólido, quizás a millas del primero, otros empleados, igualmente dedicados, igualmente trabajadores, están trabajando tiempo completo gastando nuestro dinero en subsidiar a los granjeros para plantar tabaco.

En un edificio, el Consejo de Estabilidad de Precios y Salarios está trabajando horas extraordinarias intentando persuadir, presionar, y embaucar a los empresarios para mantener los precios bajos y a los trabajadores para que restrinjan sus demandas de salarios. En otro edificio algunas agencias subordinadas al Departamento de Agricultura están administrando programas para mantener alto, o subir, los precios del azúcar, algodón y otros numerosos productos agrícolas. Aún más, en otro edificio, funcionarios del Departamento de Trabajo, bajo el Acta Davis-Bacon, están haciendo cálculos de "salarios vigentes".

El Congreso estableció un Departamento de Energía, empleando 20.000 personas, para promover la conservación de la energía. También estableció una Agencia de Protección del Medio Ambiente, empleando alrededor de 12.000 personas, para dictar regulaciones y órdenes, la mayoría de las cuales requieren el uso de más energía. Sin duda, cerca de cada agencia hay subgrupos trabajando con el propósito contrario.

La situación podría ser cómica si no fuera tan seria. Mientras muchos de estos efectos se cancelan unos a otros, sus costos no lo hacen. Cada programa toma dinero de nuestros bolsillos, que podríamos usar en comprar bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades individuales. Cada uno de ellos usa personas entrenadas, capaces, que podrían ser utilizadas en actividades productivas. Cada uno nos acosa con reglas, regulaciones, formulismos y formularios para llenar, en algo que nos enloquece a todos.

Intereses dispersos versus intereses concentrados

Tanto la fragmentación de poder como las políticas gubernamentales encontradas, están basadas en las realidades políticas de un sistema democrático que opera promulgando legislaciones detalladas y específicas. Tal sistema tiende a dar un poder político

excesivo a los pequeños grupos que tienen intereses altamente concentrados, a dar mayor peso a los efectos inmediatos, obvios, y directos de la acción del gobierno que a los efectos indirectos y demorosos, posiblemente más importantes, pero ocultos; a poner en acción un proceso que sacrifica el interés general para servir a los interesados particulares, en vez de lo contrario.

Existe en política "una mano invisible" que opera precisamente en la dirección opuesta a la mano invisible de Adam Smith. Individuos que intentan promover solamente el *interés general* son guiados por la mano política invisible a promover un *interés particular* que ellos no tenían intención de promover.

Unos pocos ejemplos clarificarán la naturaleza del problema. Examinemos el programa del gobierno para favorecer a la marina mercante mediante subsidios a la construcción de barcos y operaciones, y limitando gran parte del tráfico de cabotaje exclusivamente a barcos bajo bandera americana. Para el contribuyente, el costo estimado es alrededor de US\$ 600 millones al año, ó US\$ 15.000 al año para cada una de las 40.000 personas ocupadas activamente en la industria. Los dueños de buques, sus operadores, y sus empleados, tienen fuertes incentivos para obtener y mantener esas medidas. Ellos gastan gran cantidad de dinero en cabildeos y contribuciones políticas. Por otro lado, US\$ 600 millones divididos en una población de alrededor de 200 millones de personas resultan en US\$ 3 al año por persona; US\$ 12 para una familia de 4 personas. ¿Cuántos de nosotros votarían en contra de un candidato al Congreso que nos impone ese costo? ¿Cuántos de nosotros consideraremos rentable gastar dinero para anular esas medidas, o aún gastar tiempo en informarnos sobre estas materias?

Como otro ejemplo, los dueños de acciones en compañías de acero, los ejecutivos de esas compañías, y los trabajadores del acero; todos saben muy bien que un aumento en las importaciones de acero extranjero a los Estados Unidos significará menos dinero y menores trabajos para ellos. Se dan cuenta con claridad que una acción del gobierno para impedir las importaciones los beneficiaría. Los trabajadores en las industrias exportadoras que perderán sus trabajos, porque menos importaciones desde Japón significan menos exportaciones a Japón, no saben que sus trabajos están amenazados. Cuando pierdan sus trabajos, no sabrán por qué. Los compradores de automóviles, o de cocinas, o de otros artículos hechos de acero se quejarán de los altos precios que tienen que pagar. ¿Cuántos compradores culparán por esto a las restricciones sobre las importaciones de acero que obliga a los fabricantes a usar

acero doméstico de más alto precio en vez del acero importado más barato? Ellos probablemente le echarán la culpa a los fabricantes "voraces" o a los gremios obreros "codiciosos".

La agricultura es otro ejemplo. Los agricultores desfilan en Washington con sus tractores para pedir un alza en los precios de sustentación. Antes del cambio en el rol del gobierno que hizo natural apelar a Washington, le habrían echado la culpa al mal tiempo y se habrían dirigido por ayuda a las iglesias y no a la Casa Blanca. Aún en el caso de un producto tan indispensable y evidente como el alimento, ningún consumidor desfiló en Washington para protestar por la fijación de precios. Y los mismos agricultores, aún a pesar de que la agricultura es la mayor industria exportadora de los Estados Unidos, no reconocen el grado de asociación entre sus propios problemas y la interferencia gubernamental en el comercio exterior. No se les ocurre, por ejemplo, que pueden haber sido perjudicados por las restricciones sobre las importaciones de acero.

O para tomar un ejemplo muy diferente, la Oficina Postal de Estados Unidos. Todo movimiento para derogar el monopolio gubernamental del correo de primera clase es rechazado vigorosamente por los sindicatos de los trabajadores postales. Perciben claramente que abrir el servicio postal a la empresa privada puede significar la pérdida de sus trabajos. Les conviene tratar de impedir ese resultado. Como sugiere el caso de los Brennan en Rochester, si el monopolio postal fuese abolido, podría surgir una industria privada vigorosa, con miles de empresas y empleando decenas de miles de trabajadores. Pocas de las personas que pueden encontrar una oportunidad rentable en tal industria saben que tal posibilidad existe. Ciertamente no están en Washington testificando ante el comité pertinente del Congreso.

El beneficio que obtiene un individuo de cualquier programa sobre el que tiene un interés particular, puede ser más que anulado por los costos que le significan muchos otros programas que lo afectan levemente. Aun así, le conviene favorecer ese programa, y no oponerse a los otros. Fácilmente, puede darse cuenta que él, junto al pequeño grupo con su mismo interés particular, pueden permitirse gastar dinero y tiempo suficiente para hacer una diferencia respecto a ese programa. No promover ese programa no impedirá que los otros, que le son perjudiciales, sean adoptados. Para lograr ello debería estar dispuesto, y ser capaz, a dedicar tanto esfuerzo a oponerse a cada programa como favorecer el suyo propio. Obviamente una actitud de ese tipo no es rentable.

Los ciudadanos están conscientes con respecto a los impues-

tos pero ese conocimiento se hace difícil por la naturaleza oculta de la mayoría de ellos. Los impuestos a las sociedades y sobre el consumo están incluidos en el precio de los bienes que las personas compran, sin contabilidad aparte. La mayoría de los impuestos a la renta son retenidos en la fuente. La inflación, el peor de los impuestos ocultos, no es fácil de comprender. Solamente los impuestos a las ventas, a la propiedad, y al ingreso que excede a las retenciones, son notorios directa y dolorosamente, concentrándose sobre ellos, por lo tanto, todo el resentimiento.

Burocracia

Mientras más pequeña sea la unidad de gobierno, y más restringidas las funciones que se le asignan será menos probable que sus acciones reflejen intereses particulares en vez del interés general. La imagen que viene a la mente es la del conjunto de los pueblos de Nueva Inglaterra. Los ciudadanos conocen y pueden controlar a los gobernantes; cada persona puede expresar sus puntos de vista; la agenda del gobierno es suficientemente pequeña de tal forma que cualquiera puede estar informado razonablemente, tanto de los pequeños ítems como de los de mayor importancia.

A medida que el campo de acción y el rol de gobierno se expanden —ya sea cubriendo una mayor área y población o realizando una mayor variedad de funciones— la conexión entre los ciudadanos y los gobernantes se ve atenuada. Se hace imposible para una gran parte de los ciudadanos estar razonablemente bien informados acerca de todos los ítems comprendidos en una agenda gubernamental más amplia y, más allá de ciertos niveles, siquiera sobre los ítems más importantes. Crece la burocracia que se necesita para administrar el gobierno y se interpone progresivamente entre la ciudadanía y los representantes que éstos eligen. Se convierte tanto en un vehículo a través del cual los intereses particulares pueden alcanzar sus objetivos, como, ella misma, en un importante interés particular.

Actualmente en los Estados Unidos, todo aquello semejante a un control detallado y efectivo del público sobre el gobierno, está limitado a aldeas, pueblos, pequeñas ciudades, y áreas suburbanas, y sólo sobre aquellas materias no asignadas al gobierno federal o estatal. En las grandes ciudades, estados, y en Washington, tenemos un gobierno del pueblo pero no a través del pueblo sino que a través de un gran grupo de burócratas anónimos.

No se podría concebir a ningún legislador federal leyendo,

analizando, y estudiando individualmente todas las leyes sobre las cuales debe votar. Para la mayoría de las decisiones sobre cómo votar, él depende necesariamente de sus numerosos ayudantes y asistentes, o de los cabilderos, o de sus compañeros legisladores, o de alguna otra fuente. La burocracia del Congreso, que no ha sido elegida, de seguro tiene hoy mucho más influencia en dar forma a las detalladas leyes que se aprueban que nuestros representantes elegidos.

Esta situación es aún más extrema en la administración de los programas gubernamentales. La vasta burocracia federal, repartida a través de los numerosos departamentos gubernamentales y agencias independientes, está literalmente fuera del control de los representantes elegidos por el pueblo. Los Presidentes, Senadores, y representantes elegidos llegan y se van, pero la rama civil de la administración pública permanece. Los burócratas de alto nivel son viejos maestros en el arte de usar formularios para atrasar y anular los proyectos que no favorecen; de usar reglas y reglamentos como "interpretaciones" de leyes que de hecho alteran superficial, o a veces crudamente, su veracidad; de resistir a administrar aquellas partes de la ley que desapruueban, mientras presionan sobre aquéllas que favorecen.

Recientemente, las cortes federales, enfrentadas a legislaciones cada vez más amplias y complejas, han abandonado su rol tradicional como intérpretes objetivos de la ley y se han transformado en participantes activos tanto en la legislación como en la administración. Al hacerlo, se han vuelto parte de la burocracia, y no en un segmento independiente del gobierno, que media entre sus otras partes.

Los burócratas no han usurpado el poder. No se han comprometido deliberadamente en ninguna clase de conspiración para destruir el proceso democrático. El poder les ha sido confiado. Es simplemente imposible conducir actividades complejas de gobierno mediante alguna forma distinta a delegar responsabilidades. Cuando ello conduce a conflicto entre los burócratas delegados para diferentes funciones —como, recientemente, entre burócratas delegados para conservar y mejorar el medio ambiente y los burócratas delegados para fomentar la conservación y producción de energía— la única solución posible es dar poder a otro grupo de burócratas, se dice que para acabar con los formulismos, cuando el problema real no son éstos sino que un conflicto entre dos objetivos deseables.

Los burócratas de alto nivel a quienes se les han asignado estas funciones, no pueden imaginar que los informes que escri-

ben o reciben, las reuniones a las que asisten, las interminables discusiones que mantienen con otras personas importantes, las reglas y reglamentos que dictan, son los problemas más que la solución. Inevitablemente se convencen de que son indispensables, que saben más sobre lo que debería hacerse que los desinformados votantes o los empresarios preocupados de su propio interés.

El crecimiento de la burocracia en tamaño y poder afecta cada detalle de la relación entre los ciudadanos y su gobierno. Si se tiene un motivo de queja o se ve el modo de sacar ventaja de una medida gubernamental, probablemente como primer recurso trataremos de influir a un burócrata para que falle en nuestro favor. Se puede apelar al representante que hemos elegido, pero si lo hacemos, será más probable que se le pida que intervenga en nuestro favor con un burócrata, y no que apoye una legislación específica.

Cada vez más, el éxito en los negocios depende de saber salirse con la suya en Washington, teniendo influencia sobre los legisladores y burócratas. Se ha desarrollado lo que se ha llamado una "puerta giratoria" entre el gobierno y los negocios. Servir un tiempo como empleado civil en Washington, se ha convertido en un aprendizaje para una exitosa carrera de negocios. Los trabajos gubernamentales se piensan menos como el primer paso en una carrera gubernamental de por vida, que por el valor de los contactos y por el posible encuentro con un futuro empleador. Prolifera la legislación de lucha de intereses, pero ésta, a lo más, solamente elimina los abusos más evidentes.

Cuando un interés particular intenta obtener beneficios mediante una legislación muy notoria, no solamente debe vestir su exhortación con retórica del interés general, sino que debe persuadir a un segmento significativo de personas desinteresadas, que ella tiene mérito. Rara vez será adoptada aquella legislación que defienda abiertamente el interés personal. Esto lo ilustra el reciente rechazo a otorgar mayores privilegios especiales para la marina mercante, a pesar del respaldo del Presidente Cárter después de recibir éste una importante ayuda para su campaña por parte de los sindicatos involucrados. Se apoya la protección a la industria del acero de la competencia extranjera como contribución a la seguridad nacional y al pleno empleo; el subsidio a la agricultura porque asegura una oferta de alimentos; el monopolio postal porque une a la nación; y así sucesivamente sin fin.

Casi un siglo atrás, A. V. Dicey explicó por qué la retórica en términos del interés general es tan persuasiva: "El efecto benefi-

cioso de la intervención estatal, especialmente bajo la forma de legislación, es directo, inmediato, y por decirlo así, visible, mientras que sus efectos perjudiciales son graduales e indirectos, y están fuera del alcance de la vista... De aquí que la mayoría de la humanidad debe mirar casi necesariamente a la intervención gubernamental con favor excesivo".⁴

Este "sesgo natural", como lo llamó él, en favor de la intervención gubernamental, se refuerza enormemente cuando un interés particular trata de obtener beneficios a través de procesos administrativos más que mediante legislaciones. Una compañía de transportes que apeló a la Comisión Reguladora de Transportes por un fallo favorable también usó la retórica del interés general, pero no es probable que alguien presione al respecto. La compañía no necesita convencer a nadie más que a los burócratas. La oposición rara vez proviene de personas desinteresadas y preocupadas tan sólo del interés general. Viene de otras personas sí interesadas; navieros u otros transportistas, que tienen sus propios fines particulares. Sin duda, el camuflaje usado es muy sutil.

El crecimiento de la burocracia, reforzado por el cambio en el rol de los juzgados, ha hecho una burla del ideal expresado por John Adams en su proyecto original de la Constitución de Massachusetts (1779): "un gobierno de leyes en vez que de hombres". Cualquiera que haya sido sometido a una inspección minuciosa del equipaje a la vuelta de un viaje al extranjero, que haya visto revisada su contabilidad de devolución de impuestos por el Servicio de Impuestos Internos, que haya sido sometido a inspección por parte de un oficial de la Seguridad en el Trabajo o de cualquier otra de las muchas agencias federales, que haya tenido ocasión de recurrir a la burocracia para un fallo o un permiso, o haya tenido que defender un alza de precio o salario ante el Consejo de Estabilidad de Precios y Salarios, sabe cuán lejos estamos de un gobierno de leyes. Se supone que el oficial del gobierno es nuestro empleado. Cuando usted está sentado frente al escritorio de un representante del Servicio de Impuestos Internos que le está haciendo una auditoría sobre su devolución de impuestos, ¿cuál es el señor y cuál el sirviente?

O para usar un ejemplo diferente. Una historia reciente del *Wall Street Journal* (25 de junio de 1979), es titulada: "Ex Director de una corporación llega a acuerdo con la Comisión de Valores". El Director, Maurice G. McGill, dice: "El problema no es si me he

⁴*Lectures on the Relation between Law and Public Opinion* (1914 ed.) Pag. 257-58.

beneficiado personalmente de la transacción, sino más bien cuáles son las responsabilidades de un director que no es ejecutivo. Sería interesante llevarlo a juicio, pero mi decisión de llegar a un acuerdo fue puramente económica. El costo de pelear con la Comisión de Valores hasta el fin sería enorme". Gane o pierda, el Sr. McGill tendría que pagar sus costos legales. Gane o pierda, el oficial de la Comisión de Valores que lleva el caso tiene poco comprometido, excepto el status entre sus compañeros burócratas.

Qué podemos hacer

No es necesario decirlo; aquellos de nosotros que deseamos detener e invertir la tendencia reciente, nos deberíamos oponer a medidas específicas adicionales para expandir aún más el poder y alcance del gobierno; impulsar la derogación y reforma de las medidas existentes; y tratar de elegir legisladores y ejecutivos que compartan este punto de vista. Pero éste no es un medio efectivo para invertir el crecimiento del gobierno. Está condenado al fracaso. Cada uno de nosotros defendería sus propios privilegios especiales y trataría de limitar al gobierno a expensas de alguien más. Estaríamos peleando con una hidra de muchas cabezas, que crecerían más rápidamente de las que seamos capaces de cortar.

Nuestros padres fundadores nos han mostrado un modo más adecuado de proceder: a través de un paquete de negociaciones. Podemos adoptar estatutos desinteresados que limiten los objetivos que tratamos de obtener a través de canales políticos. No debemos considerar cada caso por sus características individuales, sino formular reglas amplias que limiten aquello que el gobierno puede hacer.

El mérito de este enfoque quedará bien ilustrado por la Primera Enmienda a la Constitución. Muchas restricciones específicas sobre la libertad de expresión serían aprobadas por una mayoría sustancial de legisladores y votantes. Probablemente una mayoría favorecería la proposición de impedir a los nazis, Adventistas del Séptimo Día, Testigos de Jehová, el Ku Klux Klan, vegetarianos, o casi cualquier otro grupo pequeño que se pueda ocurrir, hablar en la esquina de una calle.

El mérito de la Primera Enmienda es que trata estos casos como un paquete. Adopta el principio que el "Congreso no podrá hacer ninguna ley... que impida la libertad de expresión"; no hay una consideración de cada caso por separado. Una mayoría la aprobó en su época y, estamos convencidos, una mayoría la apro-

baria hoy día. A cada uno de nosotros le interesa más no tener nuestra libertad limitada cuando estamos en la minoría, que interferir en la libertad de los demás cuando estamos en la mayoría, y la mayoría de nosotros estaremos, en uno u otro momento, en algún tipo de minoría.

En nuestra opinión, necesitamos el equivalente a la Primera Enmienda para limitar el poder del gobierno en el área económica y social. Una declaración de derechos económicos para completar y reforzar la declaración de derecho original.

La incorporación de tal declaración de derechos en nuestra constitución no invertirá por sí sola la tendencia hacia gobiernos aún más grandes, ni impedirá que ella cobre nueva fuerza, no en más de lo que la constitución original previno el crecimiento y centralización en el poder del gobierno mucho más allá de lo que intentaron o predijeron los creadores de la constitución. Una constitución escrita no es una condición necesaria ni suficiente para desarrollar o preservar una sociedad libre. A pesar que Gran Bretaña ha tenido, siempre, solamente una constitución "no escrita", ha desarrollado una sociedad libre. Muchos países latinoamericanos que han adoptado constituciones escritas, copiadas casi palabra por palabra de la constitución de los Estados Unidos, no han tenido éxito en establecer una sociedad libre. Para que una constitución escrita—o en cuanto a esto, no escrita— sea efectiva, debe ser sustentada por el clima general de opinión, tanto del público en general como de sus líderes. Debe incorporar principios en los que ellos creen profundamente, de tal modo que sea seguro que el ejecutivo, la asamblea legislativa y los juzgados se comportarán de conformidad a estos principios. Como hemos visto, cuando este clima de opinión cambia, también lo hará la política.

Sin embargo, y por dos razones, creemos que la formulación y adopción de una declaración de derechos económicos sería el paso más efectivo que se pueda tomar para invertir la tendencia hacia gobiernos aún más grandes. Primero, porque el proceso de formular las enmiendas tendría gran valor para formar el clima de opinión; segundo, porque la promulgación de estas enmiendas sería un modo más directo y efectivo que nuestro presente proceso legislativo para convertir este clima de opinión en políticas reales.

Como la corriente de opinión en favor del liberalismo del "New Deal" ha llegado a su máximo, el debate nacional que se generaría al formular tal declaración de derechos, ayudaría para asegurar que esa opinión se encamine definitivamente hacia la

libertad en vez de hacia el totalitarismo. Además, ayudaría a una mejor comprensión del problema de los gobiernos grandes y de sus posibles soluciones.

El proceso político implícito en la adopción de tales enmiendas sería más democrático que nuestra actual legislación y estructura administrativa, en el sentido de permitir que los valores del público en general determinen el resultado. Decisión tras decisión, el gobierno del pueblo actúa de un modo opuesto al preferido por la mayoría de la gente. Todas las encuestas de opinión pública muestran que una gran mayoría del público se opone a ciertas medidas específicas para conseguir la integración de blancos y negros en las escuelas, pero estas medidas no solamente existen, sino que continuamente se expanden. Gran parte de esto también es cierto respecto a programas sobre empleo y educación superior, y muchas otras medidas dirigidas a implementar puntos de vista que favorecen igualdad de oportunidades. Hasta donde nosotros sabemos, ningún encuestador le ha preguntado al público, "¿está usted obteniendo el valor que corresponde a más del 40% de su renta que es gastado por el gobierno para su beneficio?". Pero, ¿existe alguna duda sobre lo que mostraría la encuesta?

Por las razones presentadas en la sección anterior el interés particular prevalece a expensas del interés general. La nueva clase, venerada en las universidades, los medios de prensa y especialmente la burocracia federal, se ha convertido en uno de los más poderosos intereses particulares. Repetidamente, la nueva clase ha tenido éxito en imponer sus puntos de vista, a pesar de la gran opinión pública y, a menudo, a pesar de la promulgación de legislaciones específicas en sentido contrario.

La adopción de enmiendas tiene la gran virtud de ser descentralizada. Requiere de la acción separada de tres cuartos de la totalidad de los estados. Aún más, la proposición de nuevas enmiendas puede eludir al Congreso: el artículo 5.º de la constitución estipula que el "Congreso... por la petición de dos tercios de los distintos estados que forman la asamblea, deberá llamar a una Convención para proponer enmiendas". El movimiento reciente para llamar a una Convención para proponer una Enmienda exigiendo que el presupuesto federal esté equilibrado, fue respaldado por 30 estados a mediados de 1979. La posibilidad de que cuatro asambleas estatales más se unan al movimiento, logrando los dos tercios necesarios, ha producido consternación en Washington, precisamente porque éste es un artificio que puede efectivamente eludir a la burocracia de Washington.

Restricciones sobre Impuestos y Castos

El movimiento para adoptar enmiendas constitucionales para limitar al gobierno ya está en marcha al menos en un área: impuestos y gastos. Ya a principios de 1979 cinco estados habían adoptado enmiendas a sus constituciones que limitan el monto de impuestos que el estado puede imponer, o en algunos casos, el monto que el estado puede gastar. En otros estados, enmiendas similares están a medio camino de ser adoptadas; mientras que aún en otros estados están programadas para ser votadas en la elección de 1979. Movimientos activos para adoptar enmiendas similares están en marcha en más de la mitad de los estados restantes. Una organización nacional, el Comité Nacional para Limitar a los Impuestos (N.T.L.C.), con la cual estamos relacionados, ha servido como punto de encuentro y coordinador de las actividades de los distintos estados. A mediados de 1979 tenía alrededor de 250.000 miembros en el país, número que está aumentando rápidamente.

A nivel nacional se están desarrollando dos acontecimientos de importancia. Uno es la gestión para obtener de las asambleas estatales un mandato al Congreso para que éste llame a una convención nacional en la que se proponga una enmienda que exija equilibrar el presupuesto; inicialmente la chispa fue encendida por el sindicato nacional de contribuyentes, que tenía alrededor de 125.000 miembros a lo largo de la nación a mediados de 1979. El otro es una enmienda para restringir el gasto a nivel federal, que fue propuesto bajo el auspicio de la NTLC. El comité redactor, en el cual ambos servimos, incluyó abogados, economistas, científicos políticos, legisladores estatales, hombres de negocios y representantes de varias organizaciones. La enmienda que se propuso ha sido presentada en ambas cámaras del Congreso, y la NTLC está comprometida en una campaña nacional de apoyo a ella.

La idea básica tras las enmiendas estatal y federal, es corregir un defecto de nuestra actual estructura, bajo la cual los representantes elegidos democráticamente votan por gastos mayores de los que una mayoría de votantes considera deseable.

Como hemos visto, este resultado es consecuencia de un sesgo político que favorece a los intereses particulares. Los presupuestos gubernamentales son determinados sumando gastos autorizados para una multitud de programas separados. El pequeño grupo de personas que tiene un interés particular en cada programa específico gasta dinero y trabaja duro para obtener su

aprobación; la mayoría de las personas, cada una de las cuales será gravada con unos pocos dólares para pagar el programa, encontrará que no es rentable gastar dinero o trabajar para oponerse a él, aún si se las ingenian para averiguar sobre el programa.

La mayoría gobierna. Pero es una clase especial de mayoría. Consiste en una coalición de minorías con intereses particulares. La forma de ser elegido para el Congreso consiste en reunir grupos del, digamos, 2 ó 3 por ciento de los electores, cada uno de los cuales está interesado fuertemente en un asunto particular que difícilmente concierne al resto de los electores. Cada grupo estará dispuesto a votar por usted si le promete respaldar su posición, sin que les importe qué hace usted sobre los otros asuntos. Reúna un número suficiente de estos grupos y obtendrá una mayoría del 51%. Esta es la clase de mayoría, por acuerdo de ayuda mutua o intercambio de votos ("logrolling") que gobierna el país.

Las enmiendas propuestas alterarían las condiciones bajo las cuales operan los legisladores —estatales o federales, según sea el caso— limitando el monto total del que pueden apropiarse. Las enmiendas le darían al gobierno un presupuesto limitado, especificado anticipadamente, del mismo modo en que cada uno de nosotros tiene un presupuesto restringido. Legislaciones excesivas sobre intereses particulares son indeseables, pero nunca son inequívocamente malas. Por el contrario, cada medida será presentada como sirviendo a una buena causa. El problema es que hay un número infinito de buenas causas. Generalmente, un legislador está en una posición muy débil para oponerse a una "buena" causa. Si objeta que una de ellas aumentará los impuestos, será calificado como reaccionario dispuesto a sacrificar las necesidades humanas por motivos mercenarios; después de todo, para esta buena causa sólo se necesitaría aumentar los impuestos en unos pocos centavos o dólares por persona. El legislador está en mucho mejor posición si puede decir, "Sí, la suya es una buena causa, pero tenemos un presupuesto fijo. Más dinero para vuestra causa significa menos para otra. ¿Cuál de estas otras deberá ser recortada?". El efecto será que, en vez de confabularse para hacer mayor la torta a expensas del contribuyente, los intereses particulares tendrán que competir uno con otro si desean aumentar la proporción que tienen de ella.

Conclusión

El funcionamiento conjunto de las ideas de libertad humana y libertad económica alcanzó su máxima expresión en los Estados

Unidos. Muchas de estas ideas están todavía con nosotros. Todos nosotros estamos empapados con ellas. Son parte de la constitución misma de nuestro ser. Pero nos hemos estado alejando de ellas. Nos hemos olvidado de la verdad básica que la máxima amenaza a la libertad humana es la concentración de poder, ya sea en las manos del gobierno o de alguien más. Nos hemos convencido nosotros mismos que no es peligroso otorgar poder, siempre que sea para buenos propósitos.

Afortunadamente, estamos despertando. Estamos nuevamente reconociendo los peligros de una sociedad excesivamente dirigida, llegando a entender que los buenos objetivos pueden ser corrompidos por los malos medios, que la confianza en la libertad de las personas para controlar sus propias vidas de acuerdo a sus propios valores es el medio más seguro de alcanzar todo el potencial de una gran sociedad.

Afortunadamente, también, somos todavía un pueblo libre para elegir el camino a seguir; si continuar por el que nos lleva hacia gobiernos aún más grandes, o detenernos y tomar nueva dirección.

Apéndice

Programa Socialista de 1928

He aquí los principios económicos del programa del partido Socialista de 1928, junto con una indicación entre paréntesis de hasta dónde se han logrado. La siguiente lista incluye todas las medidas económicas, pero no su lenguaje exacto.

1. "Nacionalización de nuestros recursos naturales, empezando por las minas de carbón y represas, particularmente la Represa Boulder y Muscle Shoals". (La Represa Boulder, llamada ahora Represa Hoover y Muscle Shoals, son ahora proyectos del gobierno federal.)

2. "Un sistema gigante de propiedad pública bajo el cual el gobierno federal cooperará con los estados y las municipalidades en la distribución de la energía eléctrica a la gente, a su costo". (Tennessee Valley Authority.)

3. "Propiedad nacional y manejo democrático de los ferrocarriles y otros medios de transporte y comunicación". (El servicio de ferrocarriles para pasajeros está completamente nacionalizado a través de Amtrak. Algunos servicios de flete están nacionalizados por medio de Conrail. La Comisión Federal de Comunicaciones controla las comunicaciones telefónicas, telégrafo, radio y televisión.)

4. "Un programa nacional adecuado para control de los ríos, reforestación, irrigación y restauración". (Los gastos gubernamentales para estos propósitos son de varios billones de dólares en la actualidad.)

5. "Ayuda inmediata a los desempleados mediante el aumento de todas las obras públicas y un programa de planificación de largo plazo en obras públicas..." (En los años 30, WPA y PWA fueron la contraparte directa; ahora lo son una amplia variedad de otros programas.) "Todas las personas empleadas de esta forma

tendrán horas y salarios fijados por los sindicatos laborales." (Las leyes de Davis-Bacon y Walsh-Haley requieren que los empresarios con contratos con el gobierno paguen los "salarios prevalecientes", generalmente interpretados como los salarios más altos de los sindicatos.)

6. "Préstamos sin intereses a los estados y las municipalidades para propósitos de llevar a cabo trabajos públicos y tomar otro tipo de medidas que aminorarán la miseria general". (Las concesiones federales en ayuda a los estados y municipalidades locales, actualmente totalizan decenas de billones de dólares al año.)

7. "Un sistema de seguro de desempleo". (Parte del sistema de Seguro Social.)

8. "La extensión a lo largo de la nación de agencias de empleo público en cooperación con federaciones de trabajo de las ciudades". (El Servicio de Empleo de los EE.UU. y los servicios afiliados de empleo estatales administran una red de alrededor de 2.500 oficinas locales de empleo.)

9. "Un sistema de seguro de salud y accidente y pensión de ancianos, así como un seguro de desempleo". (Parte del sistema de Seguro Social.)

10. "Acortamiento del día de trabajo" y "Asegurar a cada trabajador un período de descanso no menor a dos días a la semana". (Legislación de salarios y horas legales que requieren pago de horas extra para más de 40 horas de trabajo a la semana.)

11. "Promulgación de una enmienda federal adecuada en contra del trabajo de los niños". (No alcanzada como enmienda, pero su esencia está incorporada en varias actas legislativas.)

12. "Abolición de la explotación brutal de convictos bajo el sistema de contrato y sustitución por una organización cooperativa de industrias en las penitenciarías y talleres para el beneficio de convictos y sus dependientes". (Alcanzado en parte.)

13. "Incremento en la tributación en los niveles altos de ingreso, de los impuestos a las corporaciones y a las herencias, de los réditos a ser usados para pensiones de ancianos y otras formas de seguro social". (En 1928, la tasa impositiva más alta al ingreso personal era 25 por ciento; en 1978, 70 por ciento; en 1928, la tasa impositiva a las corporaciones era 12 por ciento; en 1978, 48 por ciento; en 1928, la tasa de impuesto máxima del estado federal era 20 por ciento; en 1978, 70 por ciento.)

14. "Apropiación por tributación de todo el valor anual de arriendo de toda aquella tierra que se mantenga para especulación". (No ha sido alcanzado en esta forma, pero los impuestos a la propiedad han subido drásticamente.)